

“El que las hace, las paga”



La edad de imputabilidad de los adolescentes, esto es, la edad a partir de la cual un adolescente puede ser juzgado penalmente, es un debate que se renueva cada cierto tiempo en los países de la región.

Con esta frase cerró, el pasado 27 de febrero, una senadora oficialista, ex ministra de defensa de Argentina, el debate sobre la propuesta de Ley de baja a la edad de imputabilidad penal de los adolescentes. Minutos más tarde, con 44 votos a favor, el oficialismo lograba bajar la edad de punibilidad de los 16 a los 14 años. A partir de ese momento en Argentina, los adolescentes de 14 o 15 años podrían ser procesados penalmente, como adultos.

En Perú, en mayo del 2025, el gobierno publicó, junto a otras normas, la Ley N.º 32330 que modificaba el Código Penal para permitir que adolescentes de 16 y 17 años fueran juzgados como adultos por delitos graves como homicidio, sicariato, secuestro, violación sexual, extorsión, terrorismo y robo agravado. En enero del presente año, dicha ley fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, manteniendo la edad mínima de imputabilidad en 18 años. Además, se dispuso que los adolescentes que estaban en centros de reclusión de adultos fueran trasladados a centros juveniles.

En Ecuador, la Ley Orgánica de Integridad Pública, aprobada inicialmente por la Asamblea Nacional en junio de 2025, proponía que los adolescentes involucrados en delitos graves, fueran tratados como adultos, incrementando su tiempo de internamiento de 8 a 15 años, reduciendo el tiempo de prescripción de las medidas socioeducativas y volviendo a introducir conceptos ya superados en los sistemas de protección juvenil como el de la “rehabilitación”, en lugar de la “re-educación”, a la que tendrían derecho los adolescentes en el marco de un sistema de justicia restaurativa. Afortunadamente, aunque más por razones de procedimiento que por otra cosa, esta Ley fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional y, por ende, suspendida su entrada en vigencia.

La edad de imputabilidad de los adolescentes, esto es, la edad a partir de la cual un adolescente puede ser juzgado penalmente, es un debate que se renueva cada cierto tiempo en los países de la región, en muchas ocasiones, asociado a contiendas electorales o cuando la popularidad de algún presidente se deteriora. Ante el incremento de la violencia, los discursos de “mano dura” para enfrentar a la delincuencia y recuperar la paz, son ampliamente aceptados por la población. Castigar a los adolescentes que delinquen es parte del “paquete”. Los sectores más conservadores de la sociedad, al igual que muchos medios de comunicación, se suman entusiastas, convirtiéndose



en jueces de las conductas juveniles, sin beneficio de inventario, atentando frecuentemente contra la imagen y dignidad de los y las adolescentes.

Con sus respectivas diferencias y especificidades pareciera que esta corriente “punitivista” va ganando la batalla. Poco a poco se van desmontando los sistemas de justicia juvenil surgidos a finales del siglo pasado, inspirados en la Convención de los derechos de los niños de 1990, aquellos que proponían un marco normativo especializado para los niños, niñas y adolescentes, implementado por operadores de justicia igualmente especializados, y bajo un enfoque socioeducativo y de justicia restaurativa que, al menos en la letra escrita, daba preeminencia a la reparación del daño antes que al castigo. En los países de la región existen varias experiencias exitosas de aplicación sobre las que se podía haber reflexionado y avanzado en su réplica.

¿Quiénes son los adolescentes que delinquen?

La evidencia aportada por diversos organismos, tanto nacionales como internacionales, demuestra que en todos los países de América Latina los sistemas de justicia juvenil tienden a intervenir principalmente sobre los y las adolescentes que a sus cortas edades ya han experimentado múltiples vulneraciones de sus derechos.

Se puede advertir entonces que aquello que los sistemas de justicia están sancionando, son las consecuencias de la exclusión social, pero sin atender las causas que la generan.

Pareciera que se necesita un chivo expiatorio al cual culpabilizar de los males de la sociedad, y que casi siempre terminan siendo los jóvenes más empobrecidos, quienes viven en los barrios donde faltan la comida y los medicamentos, donde las cifras de deserción escolar duplican o triplican las tasas nacionales, donde los suicidios y el embarazo adolescente, resultante muchas veces del abuso sexual contra las niñas, son el pan de cada día. Las estadísticas demuestran, además, que la criminalización de los adolescentes está fuertemente correlacionada con el abandono escolar, la pobreza estructural y las desigualdades territoriales.

Se puede advertir entonces que aquello que los sistemas de justicia están sancionando son las consecuencias de la exclusión social, pero sin atender las causas que la generan. Encarcelar a los chicos que cometen delitos, no resuelve el problema de la inseguridad, sino que, por el contrario, los espacios de reclusión reproducen y profundizan la violencia y la marginalidad, tornándose más grave cuando se trata de adolescentes. Los y las adolescentes para los que se están construyendo nuevos pabellones de encierro, representan solo un pequeño porcentaje de la población encarcelada de esa edad. En Argentina, en el 2024 se identificó a 4.119 adolescentes en conflicto con la Ley. En Perú fueron 6.746. En Ecuador, en los últimos 4 años se ha registrado 8.200 adolescentes, aproximadamente. La mayoría de ellos fueron juzgados por atentar contra la propiedad privada¹.

Por lo dicho, la intención de reducir cada vez más la edad de imputabilidad de los adolescentes no hace sino desnudar la incapacidad que han tenido nuestros gobiernos y la sociedad en su conjunto para prevenir que las personas se involucren cada vez más tempranamente en el mundo delincencial, por carecer de otras oportunidades que les permitan superar las situaciones de exclusión y vulneración de derechos de las que han sido víctimas. Podremos seguir bajando la edad de imputabilidad de los adolescentes y lo más probable es que las bandas criminales

¹ Datos del Comité Nacional contra la Tortura en Argentina, Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) en Perú, y en Ecuador, corresponden a datos de la Policía Nacional.

“El derecho penal no repara lo que el Estado no supo cuidar a tiempo”.

seguirán utilizando a niños cada vez más pequeños para cometer sus delitos. Probablemente nadie lo ha expresado mejor que un juez de Catamarca, Argentina, cuando en una de sus sentencias expresó: “El derecho penal no repara lo que el Estado no supo cuidar a tiempo”.

Es indispensable, en este sentido, fortalecer los sistemas de protección social antes que ampliar las respuestas punitivas del Estado y avanzar hacia una verdadera justicia restaurativa; invertir el dinero público NO en el acondicionamiento de los centros de reclusión de adultos para albergar a los adolescentes que delinquen, sino hacerlo en centros juveniles comunitarios, en clubes de barrio, en actividades deportivas, en programas de tutoría escolar o de prevención del embarazo adolescente o del suicidio. Se requiere, de manera urgente, más políticas y programas orientados a mejorar la inversión social en los y las adolescentes, desplegando acciones complementarias que permitan reconstituir el tejido comunitario en los barrios y comunas, creando espacios de protección y de participación para escuchar su voz. Nos urge reflexionar y actuar sobre aquello que como sociedad queremos para las futuras generaciones.

Fuentes consultadas:

- Ministerio de Educación de Argentina – estadísticas educativas (Relevamiento Anual).
- INDEC – Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
- UNICEF – informes sobre trayectorias educativas y pobreza infantil.
- Argentinos por la Educación – análisis de abandono y desigualdad educativa.
- Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) – Sistema de Información Educativa.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
- UNESCO – Global Education Monitoring.
- Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ). Estadísticas del Sistema Juvenil (2024).
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú.
- Ministerio de Educación de Ecuador.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador (INEC). INEC – Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo
- UNICEF Ecuador – Niñez y Adolescencia

Entrevistas:

- Andhes. <https://www.andhes.org.ar/>
- Instituto de Niñez Universidad San Francisco de Quito- Ecuador

Equipo editorial DYA

